

## POR UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

1. La equidad debe constituir una referencia irrenunciable para la organización de la vida económica. 2. La competitividad no puede plantearse como un fin en sí mismo, al margen de la eficiencia social y ecológica. 3. La democracia y la transparencia son elementos imprescindibles en una economía sana y viable. 4. Los métodos y los ritmos para un mayor equilibrio de las cuentas públicas han de ser contextualizados. 5. La crisis se manifiesta, ante todo, como un deterioro de la convivencia social, más allá de los pequeños avances que puedan darse en términos de crecimiento. 6. La globalización no puede presentarse como una coartada, ni utilizarse para convertir el debate económico en una cuestión meramente técnica, al margen del contexto, de la política y de los valores. 7. Hace falta una Europa equilibrada social y territorialmente, capaz de defender ante el mundo la democracia y la cohesión social.

El grave y progresivo deterioro de la situación social en que vivimos está provocando un creciente desconcierto, que se une a la incertidumbre que planea sobre amplios sectores de la sociedad. Se trata de una situación de inquietud y alarma social que aconseja un pronunciamiento sobre la misma, acorde con la responsabilidad social de la universidad. Por ello, aprovechando la próxima celebración en Bilbao de un importante Foro Económico de carácter internacional los días 3 y 4 de marzo, los abajo firmantes, profesores/as del ámbito de la Economía y la Empresa de centros universitarios del País Vasco, con el apoyo de economistas de otros organismos e instituciones, y de docentes de otras universidades, queremos manifestar a la opinión pública lo siguiente:

La gravedad de la situación en la que vivimos no tiene parangón en las últimas décadas. Entre otros aspectos, creemos necesario llamar la atención sobre los siguientes:

- Según la EPA, el **desempleo** se sitúa en el 26,0 %, lo que representa el porcentaje más elevado desde el fin del franquismo en 1975. Por su parte, el desempleo juvenil supera el 55 %, provocando que cientos de miles de jóvenes se vean abocados a abandonar el país en busca de empleo. Los mismos datos señalan que el número de hogares con todos sus miembros activos en paro ascendió a más de 1.900.000 en 2013, habiéndose multiplicado por 4 en los últimos cinco años.

- El número de personas en riesgo de **pobreza y exclusión social** alcanzó en el Estado español la cifra de 12,7 millones en 2012, según la Red Europea de lucha contra la Pobreza. El último Informe de Cáritas señala que la pobreza severa (menos de 307 € al mes) alcanza ya a 3 millones de personas. Asimismo, según UNICEF, el 27% de la población infantil vive bajo el umbral de la pobreza.

- De acuerdo a los datos de EUROSTAT, España se ha situado como el país europeo con mayor grado de **desigualdad** social si se tiene en cuenta el ratio de ingresos del 20% más rico con relación al 20% más pobre de la población. Asimismo, el coeficiente de Gini ascendió a 0,34 en 2011, el nivel más alto desde que existen registros.

- Según datos de GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), el **fraude fiscal** en nuestro país asciende a más 70.000 millones de euros anuales, de los cuales el 72% corresponden a grandes fortunas y grandes empresas. Se trata de una cifra que equivaldría aproximadamente al presupuesto total del sistema sanitario público, y es sensiblemente mayor que la representada por los intereses pagados anualmente por la deuda pública. Por su parte, Tax Justice Network estima que los depósitos en los **paraísos fiscales** provenientes de España alcanzan la cifra de 550.000 millones de euros.

En estas circunstancias consideramos especialmente importante llamar la atención sobre una serie de cuestiones:

La **equidad** debe ser una referencia inexcusable del funcionamiento económico. El intenso y doloroso incremento de la desigualdad producido en los últimos años constituye una lacra y resulta incompatible con los ideales y los valores de justicia social presentes en las constituciones nacionales y en las declaraciones de principios de la Unión Europea, retro trayéndonos a situaciones previas a la segunda guerra mundial. Asimismo, la creciente desigualdad y la expulsión de la vida social de un número de personas cada vez mayor, además de ser incompatibles con los valores democráticos y humanistas, constituyen una grave amenaza para la estabilidad económica y social, para el funcionamiento del sistema productivo, para la incorporación a la actividad económica de las jóvenes generaciones y para la propia reproducción de la sociedad.

Entendemos que la rentabilidad económica y la noción de **competitividad** no deben ser presentadas como fines en sí mismos, sobre los que organizar la vida económica en su conjunto. Por el contrario, deben asociarse y supeditarse a la eficiencia social —es decir al bienestar de las personas— y a la eficiencia ecológica —vinculada a un uso responsable de los recursos que preserve los medios de vida de las futuras generaciones—. El uso y abuso de la bandera de la competitividad de unos países respecto a otros, como si la misma garantizara el bienestar de los habitantes de los territorios “vencedores”, oculta una realidad en la que las desigualdades crecen día a día dentro de los países. En este contexto, la destrucción del tejido productivo y del tejido social derivados del uso exacerbado y/o equívoco de dicha idea —paralelo por otra parte al arrinconamiento de los valores de solidaridad y justicia social— constituyen una amenaza para la estabilidad social y económica.

Queremos señalar que sin **democracia y transparencia** reales no puede haber una economía sana y viable. No es posible una economía justa y eficiente basada en la opacidad y la imposición. La economía, entendida con Aristóteles como la buena y justa administración de los recursos en aras de satisfacer las necesidades humanas, no puede gestionarse al margen de los deseos y de las opiniones de la gente, ni desde la ocultación de negocios al control y el escrutinio público. No es posible seguir manteniendo unos objetivos basados en señalar lo que conviene a la gente pero sin consultar a la gente ni oír sus quejas y demandas. No podemos seguir escudándonos en la complejidad de las cosas para dotarlas de una aureola técnica que las sitúa fuera del alcance de las personas y convierte las decisiones políticas en una cuestión restringida a expertos. La vida económica no puede establecerse contra la opinión de las mayorías o sobre la resignación de las personas que desean otras opciones pero no saben cómo plantearlas.

Las **finanzas públicas** no son el origen de la crisis y su equilibrio debe tratarse con cautela. La historia económica ha mostrado sobradamente que el razonable objetivo de restaurar el equilibrio en las finanzas públicas ajustando ingresos y gastos no puede considerarse un imperativo absoluto —prioritario respecto a otros siempre, en todo lugar y a cualquier ritmo—, ni debe plantearse a costa de socavar las bases mismas de funcionamiento de la economía y de la convivencia social. Dicho equilibrio debe plantearse, además, como un objetivo indisoluble de la lucha contra la corrupción, la evasión fiscal y el crecimiento de los mercados financieros ocultos y fuera de control. En una situación de emergencia social como la que nos encontramos, el equilibrio de las finanzas públicas no solo debe evitar el gasto superfluo e improductivo, sino que debe también concentrarse en el aumento de los ingresos, especialmente de los provenientes de quienes se encuentran en mejor posición económica, de cara a mantener los servicios públicos esenciales capaces de garantizar la equidad y la justicia social.

La crisis es, ante todo, una **crisis social**, una crisis de convivencia, para cuya solución se requiere no ya un mayor crecimiento en abstracto —que puede ser compatible con una mayor crisis social—, sino un crecimiento orientado a la creación de empleo digno, de valor social y de oportunidades para todas las personas, un crecimiento basado en una mayor eficiencia tecnológica, social y ecológica. No debe perderse de vista que la función de la actividad económica no es otra que suministrar bienes y servicios a la sociedad. Por ello, consideramos necesario otro enfoque que ponga a las personas en el centro y que sitúe a los mercados y las instituciones al servicio de la sociedad y no al revés. La crisis no podrá darse por superada hasta que haya sido resarcido el daño causado por la misma en la cohesión social.

Es posible hacer las cosas de otra manera a pesar de la globalización. Es cierto que vivimos en un **mundo globalizado** en el que el **margen de maniobra** de cada territorio es ahora menor. Pero no es menos cierto que dentro de esa economía global existen situaciones muy diversas. La presión fiscal o la lucha contra el fraude no son las mismas en unos países y otros, como tampoco lo son las prestaciones y las coberturas sociales, o los derechos laborales. Los responsables económicos de Europa y EE. UU. han tomado opciones distintas, mientras dirigentes de instituciones internacionales como el FMI admiten haberse equivocado en sus previsiones o en sus recomendaciones; mientras en Alemania se reconocen los perjuicios sociales y los abusos generados por la política llevada a cabo; o mientras varios premios Nobel de Economía discuten abiertamente algunas de las decisiones que se han venido tomando en distintas instituciones. En este contexto, queremos subrayar que no hay una única forma de hacer las cosas, que algunas recomendaciones, a todas luces injustas, no eran inevitables y que pueden plantearse propuestas alternativas con sólidos fundamentos. Se trata de opciones de política, relacionadas a su vez con valores y referencias éticas.

En cuanto a la **Unión Europea**, consideramos que está en condiciones de plantear un camino diferente, lo que tal vez no pudieran hacer de igual manera los países aisladamente. Creemos que, frente a un tipo de globalización que amenaza con destruir las instituciones democráticas en nombre del gobierno de los mercados, Europa no puede permanecer impasible o, lo que es peor, haciendo suyas —como inevitables— las limitaciones esgrimidas o impuestas desde fuera de dichas instituciones democráticas. Si Europa quiere seguir representando algún tipo de ideal o de esperanza para el futuro, debe hacer valer su fuerza frente al mundo para preservar la convivencia social y la democracia, en lugar de asumir resignadamente que el mundo nos obliga a prescindir de la democracia y de la cohesión social. El logro de una unión internamente cohesionada ha de ser una referencia inexcusable de la política económica en la Unión Europea.

Por todo ello, en las actuales circunstancias consideramos restrictivo e inoportuno plantear el debate sobre nuestro futuro económico y social sobre premisas y referencias reduccionistas que no hacen sino contribuir a la confusión agravando los problemas. Consideramos que los negocios, y la rentabilidad que pueda obtenerse de la actividad económica, deben plantearse dentro de unas reglas de juego inspiradas en el interés colectivo y no al revés. Queremos subrayar que no estamos solo discutiendo sobre la gestión arbitraria de un presente a todas luces inquietante —a la par que doloroso para una gran parte de la población—, sino también sobre las bases que habrán de permitir o impedir que nuestros hijos e hijas tengan un futuro en el que vivir dignamente en un mundo habitable.